

**REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN**



SALA LABORAL

Acta 332

Proyecto discutido y aprobado en Sala virtual

Medellín, treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el grado de consulta en favor de la parte actora, en el proceso ordinario laboral interpuesto por **GERARDO ORTIZ TORO contra COLPESIONES Y PROTECCIÓN.**

De acuerdo a lo dispuesto en la ley 2213 de junio de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

Solicitó el demandante que se declare la ineficacia de la afiliación realizada al Fondo de Pensiones y Cesantías **Protección SA.**, y, en consecuencia, se declare que debe permanecer válidamente afiliada al RPM.

Hechos

Nació el 11 de febrero de 1955, fue afiliado al ISS el 2 de julio de 1975 y procedió a trasladarse a Protección el **01 de marzo de 1997.**

El Fondo no le brindó la asesoría clara y precisa al momento del traslado sobre las condiciones particulares de cada régimen pensional.

En el año 2017 recibió la pensión de vejez por parte del Fondo Privado.

Contestación Protección S.A.

Por medio de apoderada indicó que, es cierto que el actor se afilió a esa administradora luego de ser debidamente asesorada al momento del traslado, siendo informado sobre las condiciones y requisitos de cada régimen.

Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones: Prescripción, falta de causa para pedir, buena fe, improcedencia del traslado, aprovechamiento indebido de recursos, improcedencia de devolución y compensación.

Contestación Colpensiones

A través de apoderada dio respuesta manifestando que es cierto que el demandante estuvo afiliado en esa administradora, los demás hechos no le constan.

Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones: Inexistencia de obligación de ineficacia del traslado, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas e improcedencia de la indexación de las condenas.

Sentencia de primera instancia

El Juez Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **03 de julio de 2020**, absolvió de todas las pretensiones de la demanda, toda vez que el demandante fue pensionado por el Fondo Privado, por lo que no era procedente declarar la ineficacia del traslado.

Para fundamentar su decisión indicó que, era improcedente declarar la ineficacia del traslado, toda vez que era un tema pacífico en el Tribunal y la Corte Suprema de Justicia, incluso mediante sentencia de unificación.

Esta decisión no fue recurrida y por tanto se conoce en el grado de consulta a favor de la actora.

Alegatos de conclusión

Corrido el término para alegatos establecido en la ley 2213 de 2022, Protección S.A., manifestó que

Sea lo primero mencionar que respecto a la procedencia de la declaratoria ineficacia y/o nulidad de la afiliación efectuada al RAIS, por parte de una persona que ostenta la calidad de pensionado, desde hace algunos años, el Honorable Tribunal Superior de Medellín, acogió la Sentencia de Unificación proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral de dicha corporación, con ponencia del Dr Hugo Alexander Bedoya Díaz, dentro del proceso con número de radicación 05 001 31 05 007 2015 01295 01, en la misma, el Tribunal declaró que no procede la declaratoria de nulidad y/o ineficacia de la afiliación en el caso concreto de un pensionado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Dicha decisión está fundamentada en la existencia de un nuevo acto jurídico que, en palabras del Tribunal Superior de Medellín, al cual se dirige el presente escrito, “corresponde a la solicitud de la pensión de vejez y al reconocimiento y pago de la prestación económica”, por consiguiente, no se puede dejar de lado las implicaciones jurídicas consecuencia listas, generadas por el nuevo actor jurídico que reconoció la pensión de vejez al demandante, pues de mirar únicamente el traslado inicial sin tener los actos jurídicos, derechos y obligaciones que surgieron con ocasión del reconocimiento de la pensión de vejez, sería como mantener una obligación irredimible y eterna, entendida como el poder de no permitir la extinción de las obligaciones, a través de medios válidos, como un acto jurídico nuevo.

Estos actos no pueden, ni deben depender de la voluntad exclusiva del acreedor o del deudor, quienes, como en este caso, varios años después del reconocimiento de la pensión, podrían alegar que el acto de afiliación o traslado inicial del sistema pensional es ineficaz y que debe entonces trasladarse al otro régimen, es decir, la ineficacia traspasaría el nuevo acto o negocio jurídico y otros contratos colindantes. En consecuencia, si se tiene la celebración de este nuevo acto jurídico que genera el estatus de pensionado, el cual fue realizado de manera libre y voluntaria por el demandante, no puede hablarse entonces de que haya existido ineficacia y/o nulidad de la afiliación, toda vez que el nuevo acto jurídico se hace partiendo de una solicitud de pensión rogada, garantizando la participación libre y voluntaria del actor para ser reconocida la prestación, después de haber comprendido la información de los requisitos requeridos para adquirirla, tener claridad en la importancia de los beneficiarios, la tasa de reemplazo, el capital que ahorró, la modalidad de pensión que adquirirá y quien la pagará.

Asimismo, la tesis propuesta por el Honorable Tribunal Superior de Medellín fue acogida por la Honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL373-2021 del 10 de febrero de 2021, en la cual, esa corporación se apartó de la tesis que había sostenido desde la sentencia SL31989 de 9 de febrero de 2008, en relación con los efectos derivados de la transgresión del deber de información con ocasión de los traslados entre regímenes pensionales, en efecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia reconocía la posibilidad de declarar la ineficacia del traslado del RPM al RAIS aun cuando el afiliado ya había accedido a una pensión.

Sin embargo, en la aludida sentencia SL373-2021 la Corte rectificó su doctrina anterior negando la posibilidad de que una persona que haya obtenido la pensión de vejez en el Régimen de Ahorro Individual puede regresar al RPM con ocasión de la declaratoria de la ineficacia a la que se ha hecho referencia. En efecto, la Corte concluyó que “la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso.

No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría (sic) a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto”.

Alegatos Colpensiones:

De acuerdo con lo precedente, era menester que la parte demandante ejerciera el despliegue probatorio atinente a demostrar insuficiencia en la información por parte de la AFP, aspecto que en modo alguno logra satisfacerse únicamente con la declaración de parte, lo que deriva en la asunción del riesgo de no haber probado, que se traduce en desestimar las pretensiones. Y es que la inercia probatoria no debe privilegiarse bajo el argumento de que cualquier manifestación concerniente a no haber recibido información corresponde a negación indefinida, de una parte, porque en estrictez no es así, ya que de acuerdo como se expuso en párrafos precedentes, se trata de hechos concretos, limitados en el tiempo, modo y lugar, elementos que además se encuentran documentados en el formulario de afiliación; de otra, porque es al juez, con apego en la autonomía judicial y salvaguardando el derecho a la prueba de los sujetos procesales, a quien en cada caso concreto le corresponde verificar la imposibilidad de las partes para acreditar su propuesta demandatoria.

Obsérvese que el afiliado de la seguridad social no se halla ante una imposibilidad probatoria, porque la experiencia ha enseñado que en los juicios en los que se ha deprecado ineficacia de traslado de régimen pensional, con antelación al año 20194, los demandantes acudían con testigos o hacían sus esfuerzos probatorios en aras de satisfacer la carga que les correspondía, y, aun así, en forma mayoritaria, obtenían el pretendido traslado; luego, no se trata de hechos imposibles.

Se considera que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al establecer como regla general cuál debe ser el contenido mínimo de la información, según la época en que se haya producido el traslado entre regímenes pensionales, se arroga una función que no le es correspondiente, puesto que “...al legislador, mediante norma general y abstracta, le compete establecer el estándar de prueba «en atención a los valores en juego en cada tipo de proceso»” 5 , así, como, por ejemplo, en derecho penal, que para que haya condena se requiere de conocimiento más allá de duda razonable, elemento que se encuentra regulado (Ley 906 de 2004. Art. 381).

En este orden, el acogimiento expreso o tácito de las etapas determinadas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, atinentes a establecer el contenido mínimo y alcance del deber de información, deriva en la asunción por parte del juzgador para definir el caso concreto, en pautas que determinan prácticamente el establecimiento de un estándar probatorio que resulta imposible, debido a que el modelo fijado por la alta corporación se torna inalcanzable, en la práctica, irrealizable, porque, el aumento del estándar probatorio, esto es, el alto nivel o intensidad de la información que según el órgano de cierre se debe alcanzar por quien edifica su defensa en haber

suministrado información debida, aunado a la disminución del valor demostrativo del formulario de afiliación, que cumple con los requisitos legales de la época y que a lo sumo es con lo que cuentan las AFP, deja sin opciones de defensa a las entidades demandadas, puesto que se produce un desbalance en las cargas probatorias, que deriva, ahí sí, en imposibilidad demostrativa para el extremo pasivo, con el agravante de que queda a merced de lo que el actor a bien tenga decir.

En mi sentir, la Corte petrifica una regla mediante la cual se concluye que el formulario de afiliación acredita un consentimiento, pero no informado, lo que prácticamente hace que por vía jurisprudencial se determine en forma previa el peso probatorio del documento, puesto que lo convierte en una prueba legal, tasada o tarifada. Siendo ello así, el órgano de cierre asume una competencia que no le es propia, toda vez que la determinación del valor anticipado de una prueba le corresponde al legislador, en modo alguno al juzgador.

La ley 100 de 1993, incorporó dos regímenes pensionales que confluyen, pero son excluyentes entre sí; se trata del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida y el de Ahorro Individual con Solidaridad, ambos con marcadas diferencias, pero ajustados al texto constitucional.

De acuerdo con los motivos de la Corte Constitucional en torno a la razonabilidad y proporcionalidad de la medida limitante adoptada por el legislador de 2003, se concluye que la disposición analizada se ajusta al texto superior, esto es, que el periodo de carencia o permanencia mínima en un determinado régimen, con antelación al cumplimiento de la edad mínima pensional, es constitucional. Se aprecia en el presente caso que el traslado por vía judicial se pretende habiendo cercanía a la edad mínima pensional, deduciéndose de acuerdo con las reglas de la sana crítica, específicamente las de la experiencia, que la finalidad de la parte actora es la búsqueda del reconocimiento de una prestación por vejez en el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, encontrándose que por largo tiempo no ha habido aportes al régimen pensional público, esto es, no se han realizado las cotizaciones que permitan la consolidación y proyección de un cálculo actuarial dentro del periodo mínimo de carencia establecido por el legislador, para efectos del reconocimiento pensional, lo que a la postre transgrede parte del objetivo de la norma analizada por la alta corte (Ley 797 de 2003, artículo 2.), puesto que se pone en riesgo la capitalización del sistema y la intangibilidad de los recursos públicos, debido a que es inminente el deber de reconocimiento pensional al afiliado, ante el regreso de este al régimen público, toda vez que la administradora pensional, además, deberá reconocer un subsidio que no se encontraba dentro de sus proyecciones, situación que produce un desequilibrio en el sistema pensional, con perjuicios para Colpensiones, siendo esta una causa para negar el traslado de régimen pensional.

Ahora bien, en caso de considerarse que en materia de afiliaciones al Sistema General de Pensiones, puede operar una excepción a la relatividad de los contratos, derivada de la sanción que se puede colegir de la Ley 100 de 1993, por causa de quienes eventualmente trasgredan la libertad de afiliación, se debe destacar que en el asunto particular, se trata de una persona plenamente capaz y que del acto de afiliación no se observan vicios del consentimiento que puedan dar al traste con el traslado a la Administradora de Fondos de Pensiones del RAIS, puesto que conforme con la autonomía de la voluntad privada, optó por cambiar de régimen pensional; además, según emerge de los medios de convicción allegados con el escrito de demanda, el traslado se llevó a cabo en consonancia con la normatividad que para afiliaciones ha regido, pues el formulario suscrito se encuentra ajustado a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 692 de 1994, aunado a que para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en materia pensional, no contaba con el beneficio del régimen de transición, concluyéndose que para el momento del traslado, no tenía expectativas legítimas o derechos adquiridos, lo que por contera, da cuenta de otra causa que impide su retorno al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida.

En síntesis, el traslado entre regímenes pensionales encontrándose el afiliado a diez años o menos de la edad mínima pensional, sólo se encuentra autorizado para los beneficiarios del régimen de transición, que accedieron a este por medio del tiempo de servicio o cotizaciones (Corte Constitucional, sentencias C-789 de 2002, SU- 062 de 2010 y SU – 130 de 2013), por lo que la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional de un contingente de personas con características diferentes a las dispuestas por la Corte Constitucional, pone en peligro la sostenibilidad financiera del sistema, a la par que pondría en riesgo el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados (Arts. 48 y 334 de la Constitución Política de Colombia; exposición de motivos del Proyecto de Ley 56 de 2002 Senado, que luego se convirtió en el artículo 2° de la Ley 797 de 2003 y Corte Constitucional en sentencias C-1024 de 2004 T – 489 de 2010 y SU062 de 2010).

Por último, en el evento en que la judicatura opte por acceder a las pretensiones de la demanda, comedidamente solicito que se ordene a la Administradora de Fondo de pensiones y Cesantías, para que, a favor de Colpensiones, realice la devolución integral de las cotizaciones efectuadas por la parte demandante, sin descuento alguno, durante la permanencia en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, precisando un término perentorio para el reintegro de los recursos.

El problema jurídico a resolver en esta segunda instancia atendiendo al grado de consulta en favor de la parte actora será: Establecer (i) Si es procedente declarar la ineficacia de la afiliación del demandante, teniendo en cuenta que ostenta la condición de pensionado en el RAIS por parte de la AFP **Protección S.A.**

CONSIDERACIONES

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas que obran en el expediente:

1. El actor fue afiliado inicialmente al **ISS** hoy **Colpensiones** el **02 de julio de 1975**.
2. El **1° de marzo de 1997** el demandante suscribió formulario de vinculación a la AFP **Protección**.
3. En el año 2017 el actor fue pensionado por el RAIS a través de Protección.

Efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento:

Sobre el tema respecto de la ineficacia del traslado de una persona pensionada la Sala encuentra que la Corte Suprema de Justicia en sus inicios no había tenido un pronunciamiento concreto y claro respecto del tema, pues únicamente lo había hecho destacándose la sentencia **31314 del 9 de septiembre de 2008**, donde estudió el caso de un pensionado que fue vinculado al RAIS faltándole apenas 6 meses para acceder a su derecho pensional y al que no se le advirtió de la proximidad de la consolidación de su derecho por parte de la administradora de pensiones, aspecto que fue advertido por la Corte como una clara falta del deber de información y que sancionó con la nulidad de la afiliación.

Además de este caso a todas luces particular, puede encontrarse un antecedente en la sentencia **SL-3676 de 2020**, caso en el que la Corte un estudio del artículo 107 de la Ley 100 de 1993, indicando que el contenido de lo allí normado apenas se aplica al traslado entre administradoras del RAIS, sin que pueda extenderse al régimen de prima media, debiendo dejarse claro que en el caso particular estudiado quien demandó la ineficacia no aceptó la pensión que le fuera reconocida por la AFP privada.

Sin embargo la Sala Laboral de La Corte Suprema de Justicia se pronunció respecto al tema mencionado en la sentencia **SL 373 del 10 de febrero de 2021**, Magistrada Ponente Clara Cecilia Dueñas, donde se analiza un evento de un pensionado anticipadamente, bajo la modalidad de retiro programado en la cual la Sala Laboral no **casa** la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Cali, no por las razones esbozadas en segunda instancia, sino por tratarse de una persona con estatus de pensionado desde el año 2008. Al respecto señaló la Corte lo siguiente:

“Esta circunstancia conduce a la Corte a interrogarse si es posible, bajo el manto de la ineficacia de la afiliación, que el demandante pensionado del régimen de ahorro individual con solidaridad, vuelva al mismo estado en el que se encontraba antes de su traslado al RPMPD.

Para la Corte la respuesta es negativa, puesto que si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante), lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto. Basta con relevar algunas situaciones:

Por lo tanto, no se trata solo de reversar el acto de traslado y el reconocimiento de la pensión, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según sea la modalidad pensional elegida. (...)

En cuanto a la diferencia existente entre un pensionado y un afiliado se tiene que:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, se puede afirmar que el afiliado es aquella persona que pertenece al Sistema General de Pensiones, en virtud de la vinculación a una administradora de pensiones y la selección de un régimen pensional.

La calidad de afiliado se adquiere frente al sistema de pensiones y se mantiene vigente durante toda la vida laboral del trabajador y hasta tanto se le reconozca alguna de las prestaciones consagradas en el artículo 10 de la Ley 100 de 1993, momento para el cual pasa a ser pensionado o excluido en el caso de que no haya cumplido con los requisitos para acceder a una prestación periódica y opte por el reconocimiento de una indemnización sustitutiva (literal d) artículo 2° Decreto 758 de 1990).

Entre tanto, la categoría de pensionado se adquiere una vez reconocida la pensión, y se mantiene durante toda la vida del pensionado por vejez, siendo por lo tanto un derecho adquirido.

Esta diferenciación es bien explicada por la Corte Constitucional en la sentencia C-841 de 2003, en la que para resolver acerca de la constitucionalidad de la prohibición contenida en el artículo 107 de la Ley 100 de 1993, señaló que en el régimen de pensiones existen dos categorías claramente delimitables: la de afiliado y la de pensionado, las cuales tienen derechos y obligaciones que les son inherentes.

A partir de esa diferencia esta Sala de Decisión Laboral en sentencia de unificación del **14 de agosto de 2018**, en ejercicio de la independencia consagrada en el artículo 230 de la Constitución, expuso como razones para apartarse de los lineamientos generales trazados por su órgano de cierre, los siguientes: (i) Al momento de accederse a la pensión se genera un nuevo estatus para el afiliado, luego surge una categoría jurídica que le genera unos nuevos derechos y obligaciones, (ii) el traslado entre regímenes de personas que tienen la condición de pensionados afecta la estabilidad financiera del sistema de pensiones; y (iii) de avalarse el traslado de pensionados se crearía inseguridad económica para el sistema de pensiones y afectación para sus afiliados y se atentaría contra el principio de sostenibilidad financiera.

En el aludido fallo se indicó que el tránsito de la calidad de afiliado a la de pensionado supone la celebración de un nuevo acto jurídico, subjetivo y diverso del primero, cuyos efectos sobrevinientes no deberían afectarse por la ilegitimidad del acto primigenio. Ello se ha justificado en que afiliado ha franqueado la línea que lo separa de estatus, convirtiéndose en pensionado, lo que lo sitúa en la categoría de beneficiario de un derecho adquirido bajo las normas que rigen su nueva condición.

En lo que respecta a la seguridad económica y la sostenibilidad financiera del Sistema de Pensiones, fue más en enfática la Corte en la sentencia **C-1024 de 2004**, en la que con ocasión del estudio de la constitucionalidad del literal e) del artículo 2 de la Ley 797 de 2003, que prohíbe el traslado entre regímenes pensionales cuando falten menos de 10 años para el cumplimiento de la edad pensional, dijo que esta resultaba razonable y proporcional por cuanto tenía como objetivo de evitar la “...descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material de la justicia, que personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros.”

En el mismo pronunciamiento se recordó que el derecho a elegir un régimen pensional no es absoluto y que este se encuentra subordinado a límites constitucionales admisibles que buscan la seguridad y sostenibilidad financiera del Sistema de Pensiones.

Adicional a ello no se pueden desconocer los efectos económicos que la determinación de una ineficacia traería al fondo común de naturaleza pública que administra **Colpensiones**, entidad, que, en el negocio entre el demandante y la AFP privada, es un tercero de buena fe y que ninguna injerencia tuvo en el acto jurídico de traslado, el que se vería abocado a recibir un capital menguado para asumir el pago de una prestación que no fue presupuestada.

En lo que refiere al caso estudiado, estas dos situaciones se presentan claramente delimitadas, dado que, la condición de afiliado la tuvo el señor Gerardo Ortiz Toro desde el 1° de marzo de 1997 y el año 2017 cuando le fue reconocida la pensión de vejez por el Fondo Privado.

Es importante precisar que el monto de la pensión reconocida fue aceptado por parte del actor en esas condiciones, sin que posterior a esta decisión se pueda retrotraer del acto para que sea declarada la ineficacia de un negocio predecesor, máxime que fue el demandante quien adelantó todos los trámites ante el Fondo para que procediera a reconocerle la pensión, recibiendo el retroactivo reconocido, y disfrutando de su mesada pensional.

A partir de lo anteriormente expuesto encuentra la Sala que no hay lugar a la declarar la ineficacia pretendida y en ese sentido se **Confirmará** la decisión de primera instancia.

Costas

Sin costas en esta instancia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por el Juez Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, el día **03 de julio de 2020**, en el proceso ordinario laboral promovido por **GERARDO ORTIZ TORO contra COLPESIONES Y PROTECCIÓN.**, por las razones expuestas en la parte motiva.

Sin costas en esta instancia.

La anterior decisión se notifica por **ESTADOS**.

LOS MAGISTRADOS

Radicado 05001-31-05-016-2019-00013-01
Radicado Interno P25422
Asunto: Confirma Sentencia



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ

Radicado 05001-31-05-016-2019-00013-01
Radicado Interno P25422
Asunto: Confirma Sentencia

SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

Proceso	Ordinario
Demandante	Gerardo Ortiz Toro
Demandado (s)	Protección S.A. y Colpensiones.
Radicado	05001-31-05-016-2019-00013-01
Decisión	Confirma y adiciona sentencia
Magistrado ponente	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 1 de noviembre de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 1 de noviembre de 2022 a las 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO